**HOY MARTES 28
DE MARZO DE 1989**

PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

■ Precisiones sobre Camarena

■ *Narcotráfico*, de García Ramírez

Uno de los varios valores del libro de don Sergio García Ramírez ex procurador general de la República (*Narcotráfico*, un punto de vista mexicano; Miguel Porrúa, 1989) es la puntualidad con que precisa situaciones de cuya vaguedad saca provecho la campaña permanente destinada a presentar a nuestro país como omiso en el cumplimiento de sus obligaciones contra el narcotráfico. Ejemplos pueden citarse muchos. Escogemos dos aspectos relacionados con el secuestro y homicidio del agente Enrique Camarena. ■

Recuerda el entonces Procurador que el 16 de febrero de 1985, una semana después del asesinato de Camarena y su piloto Alfredo Avelar, el gobierno de Estados Unidos inició una "operación interceptación", maniobra fronteriza que con el pretexto de extremar la vigilancia en realidad sometía a presión al gobierno de México.

"Mientras se dañaba el tránsito en la frontera —narra— imponiendo a los conductores de vehículos exasperantes molestias, nos llegaban las noticias oficiales. Tenían especial importancia las del procurador John French Smith, a punto de dejar el cargo, y del administrador o director general de la DEA, Francia Mullen, también saliente.

"Aquel requería una investigación enérgica y diligente, y éste aventuraba versiones sobre la pasividad de las autoridades mexicanas. Atribuyó a algunos funcionarios algo más que negligencia. Puso énfasis en la salida de México, pese a la vigilancia policial, de un hondureño (Juan Mata Ballesteros, acotamos en la

Plaza pública) a quien la policía norteamericana señalaba como autor intelectual de la muerte de Camarena. Esa persona fue capturada luego en Colombia, donde se evadió. En 1988 se le detuvo en Honduras y se le envió a los Estados Unidos, con un procedimiento que sólo las partes pueden calificar.

"El indiciado por la policía norteamericana ha comparecido, pues, ante las autoridades de ese país. Sin embargo, no se nos ha dado —ni a la opinión pública— ningún dato sobre la complicidad del hondureño en el homicidio de Guadalajara y acerca de su salida irregular de México. ¿Se guarda para mejor momento? ¿No hay pruebas que vinculen al hondureño con los sucesos de Guadalajara? Cómo, si fue su salida de México lo que determinó —así se dijo en fuentes oficiales— la injusta, arbitraria intercepción en la línea fronteriza!"

Y más sobre el mismo caso, en igual sentido:

"Los procesos avanzaron en los términos de la legislación nacional, con sus formas, plazos, impugnaciones, defen-

sas. Desconocedores del enjuiciamiento mexicano, algunos afirmaban, absurdamente, que no había proceso. Lo que no había —porque no los hay en el derecho nacional— son ciertos actos espectaculares como la audiencia de jurado, a que están acostumbrados en otros países y que son, para éstos, el signo de un juicio en marcha. Explicamos. Algunos entendieron. Otros no pudieron o no quisieron.

"En Estados Unidos se abrió juicio por los hechos de Guadalajara. Se basa en la legislación norteamericana que sanciona a los responsables de delitos contra ciertos funcionarios y empleados de su gobierno en el extranjero. Seguramente hay problemas, igualmente, en su sistema de investigación y enjuiciamiento, porque tampoco produjo sentencias 'rapidísimas'. Los hechos materia del proceso ocurrieron en febrero de 1985 y las primeras resoluciones de fondo se produjeron en el último tercio de 1988.

"Para integrar el expediente del juicio en Guadalajara sobre el caso Camarena, el juez mexicano requirió al de California

el envío de constancias del proceso en los Estados Unidos. Es una solicitud ordinaria de asistencia procesal, mediante carta rogatoria. Cabía esperar que se despachara con celeridad. El ministerio público hizo su pedimento el 26 de mayo de 1987. Se acordó por el juez el 26 de junio. Hubo necesidad de aclaraciones. Llegó a la autoridad norteamericana y comenzó a pasar el tiempo. El ministerio público solicitó y obtuvo que se hicieran recordatorios. Silencio. El 22 de abril de 1988, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó al juez haber recibido un télex del consulado en Washington, con esta noticia: 'Comunícole que Departamento Justicia informonos que de momento no es posible remitir documentación requerida porque expediente encuéntrase en versión estenográfica y Corte tiene atraso considerable'. Hasta octubre de 1988 no se había atendido esta petición razonable de la justicia mexicana, pese a tratarse de un asunto de gran interés para la opinión pública y las autoridades de Estados Unidos."